



**Convención sobre los
Derechos del Niño**

Distr.
GENERAL

CRC/C/SR.1245
24 de Agosto de 2009

ESPAÑOL
Original: ANGLAIS

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

45º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1245ª SESIÓN*

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el viernes, 1º de junio de 2007, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. LEE

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados Partes (*continuación*)

Informe inicial de Guatemala sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Informe inicial de Guatemala sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en conflictos armados

* No se publicaron actas resumidas de las sesiones 1243ª y 1244ª

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, **dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento**, a la Sección de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un único documento que se publicará poco después de finalizado el período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 6 del programa)(*continuación*)

Informe inicial de Guatemala sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/GTM/1; CRC/C/OPSC/GTM/Q/1 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.47)

Informe inicial de Guatemala sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en conflictos armados (CRC/C/OPAC/GTM/1; CRC/C/OPAC/GTM/Q/1 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.47)

1. *Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación del Guatemala toman asiento a la mesa del Comité.*
2. El Sr. **MARTÍNEZ** (Guatemala) presenta los informes iniciales de Guatemala sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/GTM/1) y sobre la aplicación del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados (CRC/C/OPAC/GTM/1) y dice que Guatemala se ha enfrentado no sólo con el desafío de combatir la pobreza, el crimen internacional organizado, el tráfico de drogas y la trata de personas, sino también con problemas de migración. El Gobierno ha adoptado muchas medidas dentro de los marcos jurídico y administrativo nacionales e internacionales para solucionar estas cuestiones.
3. El Gobierno y la sociedad civil han coordinado conjuntamente medidas para facilitar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de sus protocolos facultativos. En especial se aprobó en 2003 la Ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. Esta Ley convierte el interés superior del niño en la consideración primaria para proteger los derechos de los niños. La ratificación de los protocolos facultativos ha conllevado la aprobación de varias políticas e instrumentos, incluida la política de luchar contra la trata de personas y el Plan de Acción contra la Trata de Personas, que la sociedad civil ha ayudado a redactar. Guatemala ha sido el primer país de América Central que ha preparado una política y plan de acción sobre la atención de los niños víctimas de la trata y la migración ilegal. Un protocolo nacional sobre la atención de las muchachas víctimas de explotación sexual con fines comerciales se aplicará cuando lo apruebe el Gobierno. Otra iniciativa que espera la aprobación del Gobierno es el establecimiento de un órgano estatal multisectorial para luchar contra la explotación sexual con fines comerciales y la venta y trata de niños y adolescentes, y para procesar a las personas que promueven estas actividades.
4. El 23 de mayo de 2007 el Parlamento nacional aprobó el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Guatemala ha adoptado medidas para aplicar este Convenio y está preparando un conjunto de mejores prácticas para la adopción nacional e internacional.

5. El Gobierno ha adoptado ya algunas medidas para garantizar que los niños de Guatemala no se vean más implicados en conflictos armados; ha aprobado nuevas leyes sobre el servicio militar y ha ratificado el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados. La firma de los acuerdos de paz en diciembre de 1996 puso fin a 36 años de conflicto armado interno en el cual quienes más sufrieron fueron niños, mujeres y ancianos, especialmente los pertenecientes a pueblos indígenas. Ningún niño guatemalteco está implicado actualmente en ningún conflicto armado o está ejerciendo funciones militares.
6. Desde 1996 Guatemala ha restaurado el tejido social y ha creado condiciones para prevenir cualquier acción que pueda poner en peligro las vidas de los niños. Para poder proteger y promover los derechos de los niños Guatemala debe aprobar todavía una ley sobre la adopción, tipificar como delito la trata de personas y aplicar las políticas y planes de acción ya aprobados.
7. La **PRESIDENTA** invita al Comité a formular preguntas a la delegación sobre el informe inicial del Estado Parte sobre la aplicación del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/GTM/1).
8. La **Sra. ORTIZ** (Relatora del país) señala que el informe inicial del Estado Parte se ha presentado con un retraso de dos años. En Guatemala muchos niños, especialmente niños indígenas, no acaban la educación secundaria y muchos sufren malnutrición crónica. Miles de niños viven en la calle y se unen a pandillas como único medio de protección social.
9. Guatemala es un país de origen, destino y tránsito de migrantes. Muchos niños guatemaltecos son vendidos con fines de explotación sexual o comercial en Guatemala o en países vecinos. Los servicios de estos niños se anuncian abiertamente en la prensa y la Relatora ha recibido informes de que los funcionarios de inmigración y de la policía participan en el comercio y trata de menores. En relación con la adopción, ha recibido información de que se paga a mujeres para que queden embarazadas, que los documentos de los niños se sustituyen o se falsifican y que centros ilegales venden a niños recién nacidos. Al parecer los funcionarios del Estado toleran a organizaciones criminales internacionales que están implicadas en estas actividades.
10. La Relatora encomia las medidas que ha tomado el Estado Parte en los planos nacional e internacional para solucionar la situación, incluidas la aprobación de la Ley sobre la protección integral de la niñez y la adolescencia y del Plan de Acción contra la trata de personas. Guatemala ha firmado memorandos de entendimiento con países vecinos, ha aprobado el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional y ha ratificado el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
11. El informe inicial del Estado Parte y sus respuestas por escrito son poco claras, incoherentes e incompletas. Proporcionan al Comité muy poca información sobre la aplicación del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. La impresión general es que Guatemala está descuidando la aplicación de las disposiciones del Protocolo facultativo.
12. La Relatora pregunta si el informe inicial del Estado Parte se ha preparado con la participación de la sociedad civil, en especial de asociaciones de niños. Se pregunta si el

Gobierno ha utilizado el proceso de preparación del informe como una oportunidad para estudiar la situación en Guatemala de la venta de niños la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

13. Si la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia todavía existe, la Relatora desea saber cuáles son su función y sus recursos. Desea saber en particular si se ocupa de coordinar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos. Si ya no existe, desea saber qué órgano se ocupa de coordinar la aplicación de la Convención y sus dos protocolos facultativos y si este órgano promueve la participación de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Pregunta si la Secretaría de Bienestar Social de la Oficina del Presidente u otro órgano del Estado se ocupa de aplicar el Plan Nacional de Acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

14. El **Sr. FILALI** (Relator suplente del país) está de acuerdo en que el informe inicial del Estado Parte es poco claro e incoherente. Desea saber cuándo se aprobará el Código Penal enmendado y cuándo finalizará la reforma del sistema judicial. Pide ejemplos de mecanismos establecidos con miras a garantizar que se aplican los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño.

15. El informe inicial afirmaba que el Protocolo facultativo se convirtió en 2002 en parte de la legislación interna, pero parece que no todos los hechos y actividades expuestos en el artículo 3 del Protocolo facultativo están abarcados plenamente por el derecho penal de Guatemala; la delegación debería explicar esta deficiencia. El orador desea saber si los tribunales de Guatemala pueden invocar directamente el Protocolo facultativo en sus decisiones.

16. El Relator suplente desea saber si se han resuelto los problemas de Guatemala sobre la aplicación del Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional

17. Con arreglo al Código Penal en vigor los actos y actividades contemplados en el artículo 3 del Protocolo facultativo no son punibles con condenas apropiadas que tengan en cuenta su carácter grave. Además, el Comité ha recibido informes de confianza de varias organizaciones internacionales según los cuales las personas acusadas de estos actos y actividades a menudo son procesadas por delitos menos graves que implican condenas más leves. Pide una explicación por la discrepancia entre el espíritu de las disposiciones del Protocolo facultativo, por un lado, y la legislación y práctica jurídica de Guatemala, por otro.

18. El orador recuerda que se obliga al Estado Parte a garantizar que los delitos contemplados en el artículo 3 del Protocolo facultativo estén plenamente considerados con arreglo a su derecho penal, tanto si los cometen individuos como si se cometen sobre una base organizada. La reciente reforma del Código Penal sobre el delito de la trata de personas no hace mención específica de entidades jurídicas. El orador desea saber si las entidades jurídicas han quedado excluidas y si el Gobierno tiene la intención de incluirlas en futuras reformas del Código Penal.

19. La delegación debería explicar por qué el Código Penal estipula que las personas acusadas de un delito deben juzgarse con arreglo al derecho de Guatemala aunque ya se les haya juzgado en el exterior por el mismo delito. Esta disposición viola el principio del doble enjuiciamiento, con arreglo al cual un acusado no puede ser procesado por segunda vez por el mismo delito.

20. El **Sr. PARFITT** desea saber qué órgano del Estado está encargado de coordinar la política y programas para la aplicación de los dos protocolos facultativos y cuáles son sus funciones específicas. La delegación debería explicar la función del Comisión del Menor y la Familia en la aplicación de los protocolos facultativos. Pregunta cuántos funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos se ocupan de proteger los derechos de los niños y de aplicar los protocolos facultativos. Pregunta si los niños que desean presentar una denuncia con arreglo a los protocolos facultativos pueden acudir directamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Solicita información sobre si la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos trabaja intensamente para proteger los derechos de los niños, en especial los garantizados en virtud de los protocolos facultativos.

21. La **Sra. KHATTAB** desea saber cuántos casos de delitos contemplados por los protocolos facultativos se han investigado, cuántos autores de estos delitos se han procesado y si se ha creado un mecanismo de recopilación de datos para registrar la información sobre estos delitos. Pregunta cuántos profesionales se ocupan de los niños víctimas de delitos contemplados por los protocolos facultativos y qué tipo de formación recibieron estos profesionales. Sugiere que el Gobierno consulte las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, que se ocupan específicamente de los delitos contemplados en los protocolos facultativos.

22. La oradora solicita información detallada sobre el tipo de trato dado a los niños extranjeros detenidos durante redadas en burdeles y luego deportados. La delegación debería explicar por qué se mantiene en detención a víctimas de delitos contemplados en los protocolos facultativos junto con niños en conflicto con la ley, puesto que los niños víctimas a menudo están sometidos a explotación sexual. Pregunta si hay un programa eficaz de protección de testigos en Guatemala para niños víctimas de delitos contemplados en los protocolos facultativos. Pregunta si en Guatemala se ha concedido indemnización a algún niño víctima de estos delitos. La delegación debería suministrar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los niños de la calle.

23. La **Sra. AIDOO** acoge con satisfacción la aprobación por Guatemala del Plan Nacional de Acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Pregunta si se han asignado partidas del presupuesto para el Plan y si se ha aprobado la propuesta de establecer una comisión nacional para la eliminación de la explotación sexual con fines comerciales. Solicita información sobre las medidas para prestar asistencia psicosocial y material a los niños víctimas de la explotación sexual con fines comerciales. En especial desea saber cuántos niños han recibido asistencia y cuántos se han reintegrado con éxito a la sociedad.

24. Pregunta si la residencia para niñas Mi Hogar, que sólo acomoda a 62 niñas, es suficiente para atender a las niñas víctimas de la explotación sexual. Pregunta qué tipo de atención reciben las niñas y cuánto tiempo permanecen en la residencia. Desea saber qué progresos se han logrado para crear un centro de protección y formación cerca de la frontera de México. La delegación debería indicar si durante las redadas de la policía en los burdeles, las muchachas que mintieron sobre su edad y dijeron que tenían 18 años fueron puestas en libertad sin verificar sus edades. Desea saber qué medidas se han tomado para asegurar que las muchachas víctimas de explotación sexual que han sido rescatadas por el Estado no vuelven a sus explotadores. La delegación debería ofrecer una relación completa de los tratos y atención prestados a los niños extranjeros víctimas de explotación sexual. Sería deseable disponer de datos, desglosados por

edad, sexo, antecedentes socioeconómicos y niveles de educación sobre el número estimado de 15.000 niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Agradecería recibir información adicional sobre la utilización de niños en la pornografía y sobre la venta de niños. Pregunta si el Gobierno consideraría la posibilidad de realizar investigaciones, que tengan en cuenta el género, sobre las causas básicas de los delitos contemplados en los protocolos facultativos a fin de determinar la mejor manera de ayudar a los niños víctimas y a fortalecer campañas de sensibilización, programas de prevención y programas de apoyo.

25. El **Sr. CITARELLA** pide a la delegación que explique por qué la mayoría de delitos contemplados en los protocolos facultativos no están definidos como delitos en el Código Penal de Guatemala. Desea saber qué penas se imponen a los delincuentes procesados y castigados en Guatemala por delitos cometidos en el extranjero que están tipificados como delitos en los protocolos facultativos, pero no lo están en el Código Penal. Insta a Guatemala a armonizar su legislación con los protocolos facultativos a fin de que la jurisdicción extraterritorial y la extradición resulten eficaces para prevenir y castigar los delitos contemplados en los protocolos facultativos.

26. El **Sr. SIDDIQUI** desea conocer los obstáculos principales con que se ha encontrado el Gobierno al recopilar datos desglosados sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Pregunta si Guatemala ha considerado la posibilidad de pedir asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para recopilar estos datos. Desea saber cuánta asistencia exterior ha recibido el Gobierno para la aplicación de los protocolos facultativos. La delegación debería explicar por qué hay escasez grave de recursos para prevenir, investigar y suprimir los delitos contemplados en los protocolos facultativos y cómo prevé el Gobierno superar esta escasez. Pregunta qué proporción del presupuesto general se dedica a los niños, en comparación con las partidas presupuestarias destinadas a gastos militares.

27. El **Sr. PURAS** solicita más información sobre la rehabilitación física y psicológica de los niños víctimas de explotación sexual. Pregunta si los centros de rehabilitación para estos niños están separados de los centros para adultos. Pregunta qué profesionales trabajan en los centros de rehabilitación de niños y qué tipo de formación han recibido.

28. La **PRESIDENTA** pregunta si Guatemala ha adoptado medidas para reformar los trámites de la adopción internacional. Es importante que Guatemala disponga de un buen sistema de registro de los nacimientos para que la policía pueda verificar la edad de las muchachas en las redadas en los burdeles. Pregunta si el Gobierno ha conseguido resultados en la identificación de muchachos y muchachas implicados en delitos sexuales

Se suspende la sesión a las 11.05 horas y se reanuda a las 11.30 horas

29. La **Sra. LORENZANA** (Guatemala) dice que la Secretaría de Bienestar Social de la Oficina del Presidente está encargada principalmente de aplicar y coordinar la política pública sobre los niños en Guatemala. Hay actualmente iniciativas en curso para incorporar la Secretaría en un nuevo ministerio de la familia. En la residencia Mi Hogar hay un equipo de personal profesional, incluidos profesores, asistentes sociales y psicólogos que trabajan para atender a muchachas que fueron víctimas de explotación sexual. Algunos programas ofrecen a las muchachas conocimientos para empleos que les ayudarán a tener vidas productivas cuando dejen

la residencia. El tiempo durante el cual las muchachas permanecen en la residencia varía según la necesidades de cada una de ellas. Se ha rehabilitado a unas 60 muchachas que están a punto para reintegrarse a la sociedad.

30. La Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia se ocupa de aplicar y vigilar las políticas públicas para niños y adolescentes. La Secretaría de Bienestar Social está representada en la Comisión.

31. El **Sr. FILALI** pregunta si Guatemala ha realizado alguna evaluación de los efectos de las campañas de sensibilización sobre la explotación sexual de los niños.

32. La **Sra. LORENZANA** (Guatemala) dice que no se ha llevado a cabo todavía una evaluación, porque el grupo de coordinación del Plan Nacional de Acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Guatemala no tiene todavía los recursos para realizar esta evaluación. Sin embargo, el Gobierno cree que la campaña ha tenido repercusión y que la población está siendo progresivamente más consciente del problema. Los guatemaltecos están empezando también a reconocer que los niños implicados en la explotación sexual con fines comerciales son víctimas y no delincuentes.

33. La **Sra. CORZO** (Guatemala) dice que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo sobre los Derechos Humanos (COPREDEH) informa al Presidente sobre todas las cuestiones de derechos humanos y redacta informes sobre los acuerdos de derechos humanos. En 1997 se celebró un foro interinstitucional sobre derechos humanos; el foro celebra reuniones periódicas con representantes de los ministerios pertinentes y departamentos y foros sociales. Mediante estas reuniones y grupos de trabajo sobre cuestiones temáticas, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos reúne toda la información que precisa para informar a las Naciones Unidas y a órganos y procedimientos regionales de derechos humanos. Hay también un sistema especial para seguir las recomendaciones publicadas por los órganos creados en virtud de tratados y otros procedimientos especiales.

34. En 2006 se creó una comisión de alto nivel formada por representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y el Gobierno. La función principal de la comisión es promover las políticas nacionales de conformidad con las recomendaciones formuladas por los órganos de derechos humanos.

35. Representantes de departamentos y ministerios pertinentes (asuntos sociales, salud, trabajo, migración) participan en la redacción de informes para los órganos de derechos humanos y a este fin se celebran reuniones especiales. Estas reuniones ofrecen la oportunidad de debatir programas y políticas y de evaluar si se tienen en cuenta las obligaciones de Guatemala sobre la aplicación de las recomendaciones hechas por órganos de derechos humanos.

36. La oradora reconoce que el informe contiene pocos datos estadísticos. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos está intentando superar el problema promoviendo la recopilación por los órganos del Estado de datos estadísticos desglosados.

37. El **Sr. FILALI** pregunta cómo garantiza el foro permanente interinstitucional la participación amplia de diferentes sectores de la sociedad en las consultas relacionadas con la

redacción de informes. Pregunta qué sucede cuando la participación de un órgano del Estado despierta la oposición de otro órgano en un nivel superior.

38. La **Sra. CORZO** (Guatemala) dice que no conoce ningún caso en que no se haya permitido a un órgano participar en el foro. Se procura garantizar la participación más amplia posible, pero el foro es esencialmente un órgano estatal. Se celebran también consultas con ONG y con jóvenes para saber sus opiniones. El UNICEF ha prestado asistencia a Guatemala para encontrar medios de ampliar la participación de la sociedad civil en la aplicación de los tratados de derechos humanos.

39. La **Sra. ORTIZ** pregunta qué oportunidad han tenido las ONG de contribuir a la redacción del informe y a las preguntas por escrito.

40. La **Sra. CORZO** (Guatemala) dice que si bien las ONG tienen siempre la oportunidad de contribuir al proceso de redacción, prefieren generalmente redactar un informe alternativo. En cuanto a las respuestas por escrito, se han celebrado varias reuniones para consultar con los distintos órganos interesados.

41. La **PRESIDENTA** dice que si bien en teoría las ONG tienen la oportunidad de participar en la redacción de los informes, no está claro que lo hayan hecho en el informe en cuestión.

42. La **Sra. CORZO** (Guatemala) dice que la Comisión Presidencial de Derechos Humanos se ha encargado de redactar la versión final del informe al Comité. Como parte del proceso de redacción, se han celebrado reuniones con representantes de la sociedad civil. Sin embargo, los datos proporcionados por la sociedad civil no son oficiales.

43. La **Sra. ARELLANO** (Guatemala) dice que, si bien la Secretaría de Bienestar Social de la Oficina del Presidente se ocupa de la política del Estado sobre los asuntos de los niños, se han creado varios grupos interinstitucionales para tratar temas específicos de esta política. Un grupo bajo la supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupa de problemas relacionados con la trata y la inmigración ilegal. Su tarea incluye ponerse en contacto con embajadas extranjeras y misiones diplomáticas en casos de inmigración ilegal y sensibilizar sobre cuestiones relacionadas con la trata y la inmigración ilegal en círculos gubernamentales y no gubernamentales. Otro grupo se ocupa de cuestiones de explotación. Sus actividades comprenden la vigilancia semanal de burdeles, clubes de noche y otros lugares públicos para garantizar que las mujeres y muchachas no sean víctimas de trabajo forzoso o de explotación sexual.

44. Con arreglo a la Ley sobre la protección integral de la niñez y la adolescencia la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia está obligada a representar y prestar asistencia a niños en todos los procesos y a actuar en su mejor interés. Se ha procurado garantizar que las víctimas de explotación sexual o de trata no reciban un trato de delincuentes ni sufran más victimización. Es importante determinar la edad de las víctimas; si no tienen documentos de identidad válidos se les trata como menores y se les traslada inmediatamente a un albergue del Estado donde se les facilita toda la protección necesaria y el apoyo de un equipo de abogados, asistentes sociales y psicólogos.

45. Se conciertan arreglos adecuados con los consulados o misiones correspondientes para asegurar que los niños extranjeros se transfieren a la custodia judicial de su país de origen. En las causas penales, la Procuraduría General de la Nación está obligada a intervenir en los procesos y a defender los intereses de la víctima. En tales situaciones proporcionan a veces asistencia jurídica ONG como Casa Alianza.
46. La Procuraduría General de la Nación, habida cuenta de la obligación que tiene de prestar asistencia a todos los niños en tribunales juveniles, dispone de un equipo multidisciplinario que funciona en todo el país. El equipo comprende juristas, asistentes sociales y psicólogos, y sus actividades cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales como el UNICEF y la OIT.
47. La **Sra. ORTIZ** pregunta cuántos albergues del Estado hay para las víctimas y solicita información sobre el número de asistentes sociales y psicólogos empleados en estos albergues.
48. La **Sra. LORENZANA** (Guatemala) dice que hay un total de tres albergues administrados por el Estado en distintas ciudades, los cuales ofrecen atención especial a los niños víctimas de explotación sexual.
49. El **Sr. FILALI** pregunta si los albergues también ofrecen protección para niños extranjeros. Solicita información sobre los procedimientos para oír testimonios de niños víctimas.
50. La **Sra. ARELLANO** (Guatemala) dice que los niños extranjeros se acogen en albergues administrados por el Estado hasta que un juez determina su situación jurídica, se ha comprobado su nacionalidad y se han organizado arreglos para su repatriación.
51. Cuando la Procuraduría General de la Nación representa a niños implicados en causas penales, se hace lo necesario para que sus opiniones se oigan y se defienda su interés superior. Cuando los niños testifican ante un tribunal, están escondidos detrás de una pantalla de protección. Después de testificar se les acompaña fuera del tribunal y no tienen que presentarse durante el resto del proceso. Siempre les acompaña un psicólogo que atiende a sus necesidades psicológicas y un abogado que vigila que no se infrinjan sus derechos durante el interrogatorio.
52. La **Sra. LEÓN** (Guatemala) dice que el derecho penal de Guatemala se basa en el principio de *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* y que algunas disposiciones del Protocolo facultativo no pueden aplicarse en los tribunales. El Gobierno ha preparado leyes para enmendar el Código Penal que no sólo contemplarán los delitos que figuran en el Protocolo facultativo sino que también impondrán penas más duras para algunos de los actos clasificados ya como delitos. El proyecto de ley entrará en vigor dentro de poco.
53. El sistema de justicia juvenil* de Guatemala comprende tribunales que se ocupan de menores en situación de riesgo y otros tribunales para menores en conflicto con la ley. Los jueces de tribunales para juveniles han recibido formación especial en los tratados internacionales pertinentes y en las leyes internas correspondientes, y se han organizado 23

* A petición del Comité se sustituye “justicia de menores” por “justicia juvenil”.

seminarios con el apoyo del UNICEF. Se ha impartido formación a demás personal judicial para asegurar que desempeñen sus deberes de conformidad con las reglamentaciones.

54. Se proporciona interpretación en los idiomas indígenas, si es posible. Hay aproximadamente 650 funcionarios bilingües, incluidos intérpretes de los tribunales, jueces y demás personal, que trabajan en el sistema de justicia juvenil.

55. En marzo de 2006 se introdujo en la Ciudad de Guatemala un nuevo servicio de tribunal juvenil de 24 horas. Su objetivo es ocuparse con prontitud de los casos que afectan a menores a fin de garantizar que no se abusa de ellos mientras están detenidos. Desde la introducción del servicio han disminuido las denuncias por abuso y corrupción de la policía. En marzo de 2007 se ha introducido en Villa Nueva un servicio similar; se trata de una ciudad con una población juvenil grande y con problemas de violencia. Hay planes para establecer dos servicios más en otras partes del país en los próximos meses.

56. La oradora reconoce que las estadísticas relativas al Protocolo facultativo no ofrecen suficiente información sobre las víctimas. En su próximo informe Guatemala procurará incluir estadísticas más precisas y desglosadas sobre delincuentes y víctimas.

57. El **Sr. CITARELLA** pregunta cuando entrarán en vigor las enmiendas propuestas al Código Penal.

58. El **Sr. FILALI** dice que, si bien algunos de los actos que figuran en el Protocolo facultativo no se han clasificado todavía como delitos con arreglo al derecho de Guatemala, entiende que el Protocolo facultativo puede invocarse ante los tribunales, porque se ha incorporado a la legislación interna. La delegación debería esclarecer esta cuestión.

59. Pregunta si la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado alguna vez de casos relacionados con el estatuto del Protocolo facultativo en el derecho guatemalteco. Desea saber si se proporciona protección adecuada a los jueces y a otras personas que intervienen en los procesos penales sobre delitos contemplados en el Protocolo facultativo.

60. La **Sra. LEÓN** (Guatemala) dice que si bien las disposiciones del Protocolo facultativo se aplican en la legislación interna, no puede castigarse a los autores por actos que no están clasificados como delitos por el derecho penal de Guatemala. Si bien la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado que en algunos casos la legislación interna debe tener precedencia sobre los instrumentos internacionales, se precisa todavía una jurisprudencia definitiva sobre la jerarquía de los instrumentos legislativos.

61. El **Sr. MORALES** (Guatemala) dice que corresponde a la Comisión sobre el Menor y la Familia y a la Corte de Constitucionalidad garantizar que las organizaciones delictivas no impidan que se conviertan en ley los proyectos de enmienda al Código Penal. Confía que el Congreso aprobará las enmiendas a su debido tiempo y que también aprobará la iniciativa relativa a la Ley sobre adopciones.

62. El Gobierno reconoce la importancia de priorizar los derechos de los niños en sus asignaciones presupuestarias, pero los ingresos fiscales son bajos, y el Congreso tiene que actuar con prudencia al asignar recursos. Por ello los donantes internacionales tienen una función

importante que desempeñar. Por ejemplo, el establecimiento de un parlamento de los niños con apoyo del UNICEF ha ayudado a colmar la separación entre la sociedad civil y el Congreso.

63. La **Sra. ORTIZ** (Relatora del país) acoge con satisfacción la aprobación por Guatemala del Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Se pregunta si el Gobierno tiene previsto establecer un órgano independiente con los recursos financieros y humanos necesarios para desempeñar su mandato. Desea saber si el Gobierno planea crear un mecanismo para impedir la corrupción, que tiene efectos importantes en la adopción. La delegación debería indicar cuántas adopciones internas e internacionales hubo en 2006 y 2007 y cuántos familiares han presentado denuncias para conseguir el retorno de niños adoptados ilegalmente. Le interesaría saber cuántos intermediarios se dedican a inducir a las madres a renunciar a sus hijos y a entregarlos a la adopción y qué probabilidad hay de que estos niños puedan volver a su familia. Habida cuenta del gran número de niños adoptados que regresan a Guatemala para conocer su raíces, se pregunta si el Gobierno tiene intención de enmendar sus leyes para incorporar el derecho de los niños a saber quiénes son sus padres biológicos. Pregunta hasta qué punto se aplica la nueva ley sobre el Registro Civil y si puede contribuir a prevenir la falsificación de documentos.

64. El **Sr. FILALI** (Relator suplente del país) dice que no está claro si se ha aplicado o no a la adopción entre países el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. El Comité ha recibido información de que Guatemala debería retirar su reserva a los artículos 11 y 12 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados antes de que pueda entrar en vigor el Convenio de la Haya.

65. La **Sra. AIDOO** expresa preocupación por los recursos limitados asignados a la Secretaría de Bienestar Social y pregunta si el Gobierno tiene intención de elevar su categoría de secretaria a ministerio para que tenga la capacidad de aplicar las políticas de protección a los niños.

66. El **Sr. MORALES** dice que el Gobierno está estudiando actualmente tres modelos para el establecimiento de una autoridad central sobre la adopción. Una posibilidad es establecer una comisión nacional, con su propio presupuesto, que represente a la sociedad civil y a los distintos órganos del Estado que se ocupan de cuestiones relacionadas con la adopción. El segundo modelo es un consejo nacional para la adopción, financiado por la Procuraduría General de la Nación. La tercera posibilidad es que la Secretaría de Bienestar Social desempeñe la función de autoridad central.

67. El Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional forma la base del procedimiento de adopción en Guatemala. El objetivo de la nueva ley es consolidar las condiciones jurídicas para este procedimiento. Además, hay medidas para prevenir la trata y el contrabando durante el proceso de adopción, y Guatemala está cumpliendo el Convenio de la Haya. Puesto que se ha establecido un marco jurídico adecuado no sería prudente retrasar los numerosos casos de adopción hasta que se tome una decisión sobre el establecimiento de una autoridad central.

68. El **Sr. ARCE** (Guatemala) dice que las oficinas del Registro Civil pronto emitirán documentos de identidad protegidos que servirán para determinar la identidad de los menores objetos de trata o de explotación.

69. La **Sra. ORTIZ** pregunta cómo se castiga a los funcionarios que cometen delitos contra niños. La delegación debería suministrar información sobre las medidas que el Gobierno está adoptando para garantizar la seguridad de los niños en los lugares de trabajo donde sus vidas corren peligro. Se pregunta que se está haciendo para frenar la promoción de Guatemala como destino del turismo sexual.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas
